

OFICIALISTAS Y OPOSITORES COINCIDEN EN LO FUNDAMENTAL PELEAN POR PAGAR UNA DEUDA QUE ES ILEGÍTIMA

La crisis del Banco Central, que enfrenta al oficialismo con la oposición de centro y de derecha, puso en claro que las diferencias se dirimen sobre una base que es común a las posiciones en pugna. El gobierno reivindica su derecho al control sobre la política monetaria y financiera, mientras que sus opositores reclaman el respeto a la autonomía de la entidad. Esa autonomía significa, lisa y llanamente, mantener a la autoridad monetaria en la órbita de gravitación del capital financiero internacional y de sus agentes locales. En consecuencia, una de las primeras exigencias de un programa nacional-democrático es poner fin a esa dependencia y recuperar un resorte de importancia estratégica para la orientación del proceso de acumulación de capital. Pero entre esta demanda y las intenciones del gobierno hay una diferencia más que apreciable: ¿un Banco Central bajo el mando de un connotado representante del parasitismo financiero, como es Mario Blejer, antiguo funcionario del FMI, del Banco de Inglaterra y del Banco de Israel, o como antes lo fue Martín Redrado, designado en el cargo por el ex presidente Kirchner?

En definitiva, el plan del gobierno es hacerse de una parte de las reservas para garantizar el pago de la deuda (o, simplemente, saldar una parte de los vencimientos

de 2010), pagarles a los acreedores que no entraron en el canje y también al Club de París, iniciativas con las que espera crear las condiciones para retornar más adelante a los "mercados" e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Desde su punto de vista, que prescinde de juzgar sobre la legitimidad de la deuda, es indiscutiblemente más conveniente aplicar reservas a su pago que tomar crédito a tasas que para el país oscilan en torno al 15 por ciento.

La oposición de radicales, cobistas y cívicos, unidos en esta cruzada a macristas, peronistas disidentes y seguidores de De Narváez, se ha juramentado en la defensa de la autonomía del Banco Central, pero coinciden con el oficialismo en la necesidad de regularizar la relación con los prestamistas internacionales y pagar todas las deudas, además de reestablecer relaciones plenas con el FMI. La llave de su programa es un fuerte ajuste fiscal para poner fin al desequilibrio en que han caído las cuentas públicas en el último año. Se trata de una típica política antiobrera y antinacional, que lleva directamente al aumento de la explotación y al empobrecimiento de las masas trabajadoras.

En consecuencia, el oficialismo y el grueso de la oposición coinciden en lo fundamental: la deuda debe ser pagada. Tal



Otros tiempos.

como dijo la presidenta Cristina Fernández, "no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo". Según su "sabia" reflexión, el momento de investigar la deuda fue el de Alfonsín, durante el primer gobierno constitucional luego de la dictadura. Curioso criterio.

En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner pagó de una vez y por adelantado 9.900 millones de dólares al FMI, y presentó la decisión como un acto de soberanía nacional. El 80% de esa suma era parte de la deuda contraída por el gobierno de De la Rúa mediante la operación conocida como "blindaje", y fue utilizada para financiar la fuga masiva de capitales de 2001 con la complicidad de las autoridades del organismo financiero. Esto fue establecido por una auditoría interna del FMI, entidad que en su carta orgáni-

ca prohíbe expresamente maniobras de este tipo. ¿Tampoco en ese momento era posible declarar ilegítima esa deuda? El doble discurso kirchnerista queda al desnudo cada vez que lo que está en juego es la dignidad y la soberanía nacional.

En junio de 2000, el juez Ballesteros, en la causa iniciada por Alejandro Olmos contra José Alfredo Martínez de Hoz, emitió un pronunciamiento, entre cuyas conclusiones figura el siguiente párrafo:

"Ha quedado evidenciado en el trasuntar la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y se promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener la política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado".

Martínez de Hoz, procesado en esa investigación, quedó sobreseído por prescripción de la acción penal, pero el juez giró las actuaciones al Congreso, poder que, de acuerdo con la Constitución, es el encargado de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Sin embargo, los legisladores, con el mismo "realismo" de la presidenta Fernández, mantienen desde hace diez años archivado el molesto presente.

Si algo ha probado la crisis institucional originada en la lucha por el control del Banco Central, es la coincidencia básica en torno a la cual dirimen posiciones oficialistas y opositores. Unos y otros inscriben sus programas en el horizonte petrificado de un país semicolonial y se ajustan disciplinadamente a su papel principal, que es el de reproducir, con variantes, los mecanismos centrales de la dependencia. Cuando la crisis orgánica —que no quedó cerrada tras la recomposición del régimen en 2002— reaparezca con toda su fuerza, las grandes masas trabajadoras y populares, organizadas en un vasto Frente Nacional Antiimperialista, los expulsarán definitivamente de la escena histórica. ■



En el BCRA no está presente la discusión de fondo

Como es costumbre, desde que en 1983 la partidocracia dio continuidad al Proceso instaurado en 1976, la política argentina se discute en términos futboleros. Hoy, los "equipos" son el BCRA y la Presidencia.

En la disputa por las reservas del BCRA, los asuntos de fondo son otros:

1° La supuesta autonomía del BCRA no es tal; ésta supone una cuña para que sectores del capital financiero internacional recorten la soberanía nacional en materia de política monetaria.

2° Dicha "autonomía" fue avalada por la partidocracia demoliberal en su conjunto, opositores y oficialistas actuales, incluida la señora Cristina Fernández de Kirchner.

3° El BCRA no debe ser "autónomo", sino servir a los intereses de la Nación.

4° La presencia de Redrado en el BCRA, al igual que antes la de Prat Gay, revela que el kirchnerismo no está dispuesto a llevar adelante una ofensiva real contra el capital financiero internacional,

sino que recurre a sus representantes (como los mencionados) y luego entra en cortocircuito con ellos por cuestiones coyunturales.

5° El punto central no es la supuesta autonomía del BCRA, sino el hecho de que se pretenda pagar una deuda externa comprobablemente ilegítima e ilegal —que, por otra parte, ya se pagó varias veces— con recursos de los argentinos que deberían dedicarse a levantar al país de la postración y sacar a la mayoría de sus habitantes de la miseria.

6° Un gobierno con discurso "progre" y acciones timoratas aplica lo esencial de las políticas del Proceso y se debilita día con día, mientras sus opositores, con convicción y firmeza, buscan llevar hasta sus últimas consecuencias dichas políticas. Una vez más, los factores reales de poder son los ganadores, frente a un pueblo argentino que debe organizarse para salir de las falsas opciones y construir un verdadero Frente Nacional que ponga fin a esta larga noche que inició un 24 de marzo de hace 34 años. ■

Socialismo Latinoamericano

Repsol-YPF y la continuidad del saqueo de los recursos energéticos

El horizonte de planificación de los recursos energéticos –controlado por un conjunto de empresas oligopólicas– estará cada vez más atado al negocio de éstas, mientras que el Estado –con estas reglas– asegura la continuidad de la dependencia y del saqueo de los recursos y consolida, de esa manera, un proceso estructural de apropiación de la renta hidrocarburífera y de desguace progresivo de la capacidad de decisión nacional en materia de recursos naturales estratégicos.

Por GUSTAVO LAHOUD

El pasado 22 de diciembre de 2009, las autoridades de Repsol-YPF presentaron un ambicioso plan de exploración y extracción de petróleo y gas que persigue el objetivo de reconstituir un horizonte de reservas de hidrocarburos que permita sustentar un esquema productivo sostenido en el mediano y largo plazos.

En líneas generales, el plan comprende una inversión del orden de los 500 millones de dólares en exploración de áreas anteriormente exploradas y en otras que no registran operación alguna en la actualidad, mientras que, en toda la cadena del negocio hidrocarburífero, desde las operaciones *upstream* (extracción) hasta la refinación, el transporte y la comercialización (*downstream*), se prevé una inversión de otros 1.200 mdd, lo que totaliza, aproximadamente, una inversión de 1.700 mdd durante 2010.

Por otra parte, se pauta una perspectiva de planificación exploratoria integral de alrededor de 250 bloques en distintas cuencas sedimentarias del país que actualmente no son operados por ninguna compañía. En

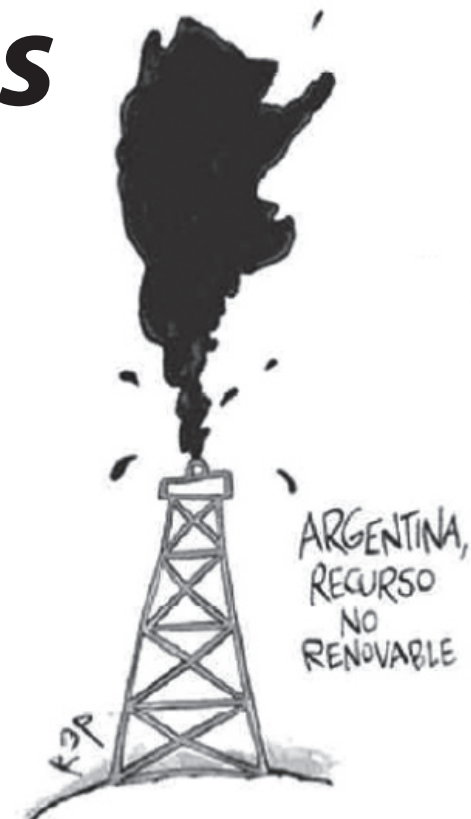
este caso, el horizonte de inversiones planificado se extiende hasta el año 2014 y supondría una inversión de, por lo menos, unos 5.000 mdd en exploración y actividades productivas.

Ahora, más allá de los fríos datos descritos, es relevante profundizar en aquellos aspectos centrales que conforman la matriz estructural del negocio energético en la Argentina, uno de cuyos operadores fundamentales es Repsol-YPF.

En primer lugar, el denominado proceso de argentinización de Repsol-YPF, iniciado hace dos años a través de la entrada en la gestión de la empresa hidrocarburífera del grupo empresarial Eskenazi, empieza a mostrar un despliegue ya más ambicioso, en términos de la compleja trama de intereses políticos y económicos que hay detrás de él. En tal sentido, hay una proyección de largo plazo que está vinculada con la opción estratégica del grupo empresarial mencionado, que intenta ser parte importante de una reconversión integral de todo el negocio hidrocarburífero en la Argentina. Pero, simultáneamente, entra en juego otro elemento relevante, de más corto plazo, que

está relacionado con las opciones políticas del gobierno kirchnerista, autor inconfundible de la mal llamada argentinización –o nacionalización parcial trucha– del recurso y, desde ese lugar, agente propiciador de la entrada del grupo Eskenazi en el negocio petrolero. En efecto, la entrada privilegiada de este grupo en el negocio del petróleo y el gas va de la mano de la consolidación de un escenario político, económico y jurídico que, en materia de recursos naturales hidrocarburíferos, cristaliza un horizonte de juego oligopólico concentrado en todos los eslabones de la cadena, cuya contracara es la profundización del escenario estratégico de desguace y provincialización de los recursos, lo que dificulta cualquier proceso serio de planificación de la diversificación de la matriz energética nacional a largo plazo.

En segundo término, la presentación de cualquier plan de exploración y producción, en un contexto de crisis estructural del modelo energético anárquico y desregulado, con el agravante de que el Estado nacional se ha autolimitado en su misma autonomía y capacidad de acción en el papel rector y planificador de los recursos naturales hidro-



carburíferos –lo cual ha sido aún más evidente luego de la sanción de la llamada “ley corta” de 2006, que profundizó el esquema de provincialización de los recursos–, supone la consolidación de un escenario de hechos consumados, revestidos del sofisma de la llamada seguridad jurídica (tal como lo expusiera el mismo Eskenazi en la presentación del plan). Esto es así porque, justamente, si hay un rol que las empresas esperan que el Estado nacional cumpla de manera eficiente en la actual coyuntura energética, es el de garante de las actuales condiciones jurídicas, políticas y económicas imperantes en el negocio del petróleo y el gas en todos los eslabones de la cadena.

Finalmente, un tercer eje analítico está relacionado con las opciones estratégicas que empresas como Repsol-YPF toman en función de las características del mercado en una multiplicidad de aspectos, que van desde lo puramente técnico hasta lo centralmente político, pasando por las decisiones tomadas a partir del juego de los otros actores participantes. En tal sentido, la presentación anunciada por Repsol-YPF confirma que, en ese horizonte, las empresas siempre realizan una lectura sistémica de las condiciones múltiples existentes en el mercado, del juego de los otros actores, de la correspondiente configuración y correlación de fuerzas y de la mayor o menor capacidad de presión sobre las autoridades que ocasionalmente ocupan los cargos públicos en las distintas jurisdicciones del Estado.

En función de todo ello, los análisis parciales y segmentados que permanentemente sacan fotos estáticas de la realidad suponían, en el caso de Repsol-YPF, que la empresa estaba desinvirtiendo masivamente en todo el negocio hidrocarburífero y de la energía en el país, cuando, en realidad, lo que hacía y hace es encarar una diversificación profunda de sus intereses estratégicos en todos los eslabones de la cadena del negocio y en la planificación aún más amplia de todo el sector energético, contando, para ello, con la complicidad decisiva de la actual administración kirchnerista.

En definitiva, el horizonte de planificación de los recursos energéticos –controlado por un conjunto de empresas oligopólicas– estará cada vez más atado al negocio de éstas, mientras que el Estado –con estas reglas– asegura la continuidad de la dependencia y del saqueo de los recursos y consolida, de esa manera, un proceso estructural de apropiación de la renta hidrocarburífera y de desguace progresivo de la capacidad de decisión nacional en materia de recursos naturales estratégicos

No pagar deuda ilegítima y fraudulenta

Un llamado a “la más amplia unidad por el no pago de la deuda, ilegítima y fraudulenta” ha sido formulado por una serie de organizaciones y militantes del campo popular, a través de una declaración que denuncia la coincidencia de fondo existente entre el oficialismo y la oposición partidocrática en su sometimiento a las exigencias del parasitismo financiero internacional.

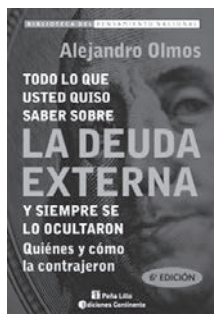
La deuda es ilegítima en su origen, consecuencia de actos de la dictadura cívico-militar que usurpó el gobierno de la nación entre 1976 y 1983, “y es también fraudulenta por diversos delitos cometidos en las sucesivas renegociaciones (capitalización, Plan Brady, canjes, megacanje, vaciamiento del 2001, etcétera)”.

Los firmantes de la declaración exigen que se aceleren las distintas causas judiciales abiertas y denuncian que ninguna renegociación se realizó con auditoría previa ni registro de acreedores, ni se verificó la deuda reclamada. Sostienen que la última renegociación realizada por Kirchner-Lavagna fue una “verdadera estafa nacional e internacional”, cuyas consecuencias ahora salen a la luz cuando su crecimiento no puede ser frenado, ni aun destruyendo el INDEC para reducir los ajustes por inflación, y cuyo pago llevó al gobierno a meter mano en diversas cajas, comenzando por las provincias y los jubilados.

En otro de sus párrafos, los firmantes del pronunciamiento se declaran contra el pago de la deuda con reservas, pero al mismo tiempo exigen la destitución de Martín Redrado al frente del Banco Central, por haber permitido la fuga de 40.000 millones de dólares



Alejandro Olmos



en los últimos cuatro años. Asimismo, reclaman que el Congreso cumpla su responsabilidad constitucional, que se respeten los fallos judiciales que probaron el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda y, en consecuencia, que se suspendan los pagos “hasta que una Auditoría Pública dé una respuesta exhaustiva a las preguntas [...] ¿Realmente debemos? Y si es así, ¿a quién debemos?, ¿por qué debemos?, ¿cuánto debemos?, ¿qué comisiones se pagaron?, ¿[a] dónde fueron los fondos?”.

Además de reclamar la convocatoria a una consulta popular que decida sobre la deuda, los firmantes de la declaración exigen la formación de una Comisión Investigadora integrada por personas de intachable trayectoria y por organizaciones populares

Firman el pronunciamiento, además de Socialismo Latinoamericano, entre otros, Mario Cafiero, Centro Cultural Alejandro Olmos, Convergencia de Izquierda, Corriente Patriótica Revolucionaria, CTD Aníbal Verón, Foro Argentino de la Deuda Externa, Izquierda Socialista, MOP Mov. de Organizaciones Peronistas de Quilmes y Florencio Varela, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, MPR Quebracho, MST, OLP, PCR, PO, Polo Obrero, Proyecto Nacional, PTS, Gustavo Luis

Breide Obeid, Nicolás Hadad (integrante del Centro Vecinal Los Boulevares de Córdoba) y el Foro de la Deuda Externa - Delegación Córdoba), Mario Mazzitelli (PSA), Marcelo Parrilli, Miguel Angel Espeche Gil, Susana Rearte.

Haití, la danza de las hienas y la solidaridad verdadera

Por FACUNDO ARRIETA

Las miradas del mundo se han vuelto sobre Haití debido a las consecuencias del terremoto que lo sacudió y que dejó más de 150 mil muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Pero el terremoto y sus réplicas no han sido el mal mayor para el sufrido pueblo haitiano.

Corresponde repasar fugazmente la historia. El pueblo haitiano fue el primero de América Latina en independizarse, marcando el camino de la lucha emancipadora de nuestra Patria Grande. También protagonizó la primera revolución triunfante de esclavos. A pesar de ello, la ignominia y la tragedia han sido su destino. Cincuenta años después de la llegada de los españoles, no quedaba uno solo de los habitantes originarios, víctimas del exterminio y de enfermedades traídas por los “civilizadores”.

A España le sucedió Francia como potencia colonialista y explotadora, que convirtió a Haití en la colonia más “productiva” del mundo, saqueando sus riquezas gracias al trabajo de miles de esclavos traídos de África.

Obtenida su independencia respecto de Francia en 1804, Haití sufrió un criminal bloqueo político, económico y militar a manos de Francia, con la complicidad de Inglaterra y EU. Décadas pasaron antes de que las potencias reconocieran su independencia a cambio de humillantes condicionamientos. En 1844, Haití perdió la parte oriente de la isla, territorio que pasaría a ser República Dominicana. En 1908, EU comenzó a desarrollar negocios, y siete años después, en 1915, invadió por primera vez Haití con la excusa de “defender sus intereses”; ejerció un control absoluto hasta 1934, y en 1937, por órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo, fueron masacrados más de 15 mil haitianos.

Con el abierto respaldo militar y económico de EU, durante décadas se sucedieron dictadores sanguinarios que, a cambio de riquezas personales, aterrorizaban y sumían en la miseria a sus gobernados para proteger los intereses estadounidenses. El más famoso, François Duvalier, conocido como *papa Doc*, a quien se le atribuyen más de 60 mil asesinatos.

Elegido democráticamente en 1990, Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en 1991 por un golpe de Estado liderado por el asesino Raoul Cédras, con el respaldo de EU y Francia. En 2001, Aristide volvió a ganar las elecciones y en 2004 volvió a sufrir un golpe de Estado; secuestrado por fuerzas de EU y Francia, fue deportado a Sudáfrica. Luego de un gobierno interino, René Préval gana las elecciones en 2006. Sus llamados a la comunidad internacional caen en saco roto. La respuesta siempre es la misma: Haití debe cumplir con las premisas del Consenso de Washington.

Antes del devastador terremoto de enero de 2010, el 76% de los haitianos vivía con menos de 2 dólares diarios y el 56% lo hacía con menos de 1 dólar por día, y eso gracias a que las remesas de los haitianos en el extranjero —la mitad de sus ciudadanos— representan el 52.7% del producto interno bruto, de acuerdo con datos del Banco Mundial para 2007.

El caos generado por un sismo de 7.3° en un contexto semejante, sin duda, obliga a tomar medidas extremas en materia de salud, alimentación y seguridad. Que sea necesario poner orden para hacer efectiva la ayuda humanitaria no puede discutirse; que sea EU —o cualquier otro país— el que se arrogue el derecho de poner el imprescindible orden es inadmisiblemente.

El terremoto y sus réplicas no han sido el mal mayor para el sufrido pueblo haitiano. A través de sus legítimos representantes, el pueblo de Haití debe tener el control político durante la emergencia y toda ayuda debe someterse a dicha soberanía.

Más de 16 mil soldados estadounidenses —hasta al momento de escribir estas líneas— ocuparon literalmente Haití; controlaron el aeropuerto, la sede del gobierno y demás instalaciones estratégicas. Mientras algunos gobiernos, como el español, alaban las acciones “humanitarias” del invasor, otros, como Francia, señalan su “derecho a participar”. La ONU, como siempre, hace declaraciones, los bancos españoles cobran escandalosas comisiones por la “adminis-

tración” de los donativos, el papa reza en su majestuosa residencia y EU consolida su nueva invasión.

En contraste, uno de los pueblos más castigados del mundo, invadido y sometido al exterminio por el sionismo —el pueblo palestino—, ha donado lo poco que puede a la Cruz Roja. Silenciosamente, durante más de una década, colaboradores cubanos han permanecido en Haití. Desde el terremoto, 400 médicos de Cuba constituyen la prime-



ra fuerza de asistencia médica a los sobrevivientes y 600 más se sumaron al contingente en las primeras horas luego del desastre.

Las graves consecuencias del terremoto son resultado de la dramática historia. Las potencias que explotaron Haití buscan sacar tajada del horror y no se debe permitir. El pueblo haitiano, a través de sus legítimos representantes, debe tener el control político durante la emergencia y toda ayuda debe someterse a dicha soberanía. ■

La batalla de Copenhague

Por GUILLERMO HAMLIN

La Cumbre de Cambio Climático, organizada por la ONU en Copenhague entre los días 7 y 18 de diciembre de 2009, fue una verdadera batalla.

Hubo una acción psicológica previa del imperialismo preparando a la población mundial para el ataque que estaba por lanzar: forzar la firma de un pacto climático que implicaba el cobro de impuestos a la emisión de dióxido de carbono.

Hubo acciones de espionaje previas a la realización de la Cumbre que revelaron manipulaciones en los informes científicos sobre el clima.

Hubo más acciones de espionaje al trascender, en el transcurso de la Cumbre, el contenido del denominado “documento danés”, borrador del pacto a firmar que iba a ser propuesto por los países imperialistas.

Montaje de un “clamor popular” pidiendo la “salvación del planeta”, conducido por las conocidas ONG transnacionales al servicio del imperialismo, como WWF y Greenpeace, cuyos sinceros militantes costearon el viaje desde remotos lugares del planeta, y la “represión” que dio más espectacularidad a la mascarada.

Montaje de la cumbre paralela “opositora al comercio de emisiones”, pero que aceptaba la tesis del IPCC, de que el dióxido de carbono “es el malo de la película”. El KlimaForum09 apareció como una cumbre “alternativa”, pero fueron financiados por los mismos organizadores del evento de la ONU.

Amagos sorprendidos de último momento, como la aparición de Hillary Clinton anunciando el aporte de 100 mil millones de dólares para el comienzo del programa de combate al calentamiento global.

Para concluir, el ataque final de Obama: su frustrado intento de aliarse con China. Sin el apoyo chino, el ataque perdió consistencia. Los países del Tercer Mundo resistieron y no aceptaron el atropello; derrotaron al imperio en la batalla de Copenhague. Celebremos que no se firmó nada vinculante.

Se filtró al periódico inglés *The Guardian* el “texto danés” que el grupo de los países imperialistas pretendían que firmaran los países del Tercer Mundo. Había sido redactado por la compañía PricewaterhouseCoopers, como colofón de la reunión de empresas celebrada en Copenhague entre los días 24 y 26 de mayo. Asistieron las grandes corporaciones, así como Al Gore, Ban Ki Moon —secretario general de la ONU— y la ministra de Clima y Energía de Dinamarca, Connie Hedegaard.

Todo esto tiene poco que ver con el medio ambiente y mucho con un programa financiero para maximizar ganancias. El pacto del llamado “texto danés” incluía límites desiguales en cuanto a la emisión carbónica para el año 2050: los países imperialistas podrían emitir el doble de lo que podrían emitir los países del Tercer Mundo. Además, se proponía la realización de auditorías independientes a estos países para controlar el estricto cumplimiento de las emisiones pactadas en el tratado.

Se proponía también que la financiación de la “ayuda para la lucha contra el cambio climático” se obtuviera a partir de impuestos a la emisión de dióxido de carbono que todos los países firmantes deberían pagar y confiar al Banco Mundial, el cual emitiría los créditos y, junto con otras nueve organizaciones privadas, formaría parte del “Fondo Ecológico Global”, al que se planea entregar el control de los recursos naturales del planeta.

Las razones de estas maniobras son transparentes: la posibilidad de seguir adelante con un fraude mucho mayor aun que la fabulosa estafa de derivados como el del “crédito hipotecario para el negro de Alabama”, que hizo estallar la burbuja de Wall Street y será llevada a cabo por el mismo grupo de estafadores.

El sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono está en constante crecimiento y se pronostica que su mercado podría llegar a ser el doble que el del mercado de petróleo en la próxima década.

Los conglomerados financieros que ya han tomado posiciones son los estafadores globales de siempre: desde JP Morgan Chase hasta Goldman Sachs y, por supuesto, PricewaterhouseCoopers, que, junto con Enron y Arthur Andersen, fueron pioneros en el negocio del comercio de emisiones y que,

trabajando al mismo tiempo como contadores y consultores para las firmas emisoras de CO₂, obran como verificadores de los proyectos de reducción de emisiones.

El propuesto control de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la realización de auditorías “independientes” a los países signatarios del pacto, obraría en forma similar a los controles de la AIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. Es decir, mientras esta última practica la política de “desarmar a los desarmados”, este nuevo ente de fiscalización propuesto por la ONU practicaría la política de “subdesarrollar a los subdesarrollados”.

Los países del Tercer Mundo hemos ganado esta batalla en la “guerra por los recursos del planeta”; pretendieron que firmáramos nuestro propio certificado de defunción: limitar las emisiones de dióxido de carbono, que son las emisiones industriales por excelencia.

El imperialismo acusó el impacto: calificaron al resultado de la Cumbre como un fracaso; por supuesto, utilizando las formas de la usual hipocresía: “Seguimos sin un acuerdo para salvar al planeta” es el título de un artículo de Joseph Stiglitz. Pero su verdadera preocupación está en la frase donde expresa que “las consecuencias del fracaso ya se pueden ver: el precio de los derechos de emisiones del Sistema de Intercambio de Emisiones de la UE ha caído.

A los países imperialistas sólo les interesan los negocios y por ello deben asegurarse el acceso a los recursos de todo el planeta, para lo cual necesitan dar otra vuelta de tuerca a la “governabilidad” del Tercer Mundo; se preparan para otro ataque en diciembre de este año en México, donde se celebrará la próxima “Cumbre de Cambio Climático”.

Los países del Tercer Mundo seguiremos defendiendo nuestro derecho al desarrollo, que es el que el imperialismo viola de muchas maneras: la del fraude del “Calentamiento Global” es una más. ■



La reconstrucción del ferrocarril tiene importancia estratégica para la formulación de un proyecto nacional

La desarticulación y destrucción de la mayor parte de la red ferroviaria fue uno de los objetivos centrales del proceso de colonización de los años noventa. Se trató de una derrota nacional en el orden material y cultural de devastadoras consecuencias. Éldo Veschi, ex secretario general de Apedefa (Asociación de Personal de Dirección de los Ferrocarriles), reflexiona sobre este triste capítulo de la vida nacional y traza una perspectiva desde donde formular una política de reconstrucción ferroviaria.

El tema de las concesiones ferroviarias debe verse en el marco de la desindustrialización, que ya se había producido en el período del proceso militar con Martínez de Hoz y que continúa de alguna forma, porque no logró desindustrializarse de manera absoluta. Muchos talleres ferroviarios, que son una industria importantísima, quedaron: Fabricaciones Militares quedó; SOMISA quedó. Entonces, había que terminar el proceso, porque en realidad el fondo de la cuestión era desestructurar las regiones y las economías del país, y sacar la posibilidad de que un Estado, un gobierno razonable, utilizara al Estado como debe ser usado, con equilibrio de intereses, planificación a mediano y largo plazo, orientación del crédito, en fin, todas esas cosas que se aborrecían en el Consenso de Washington y que evidentemente son las herramientas con las cuales las grandes potencias crecieron.

Entonces, para instalar esto, primero hubo que infligir una derrota cultural muy grande. La derrota cultural está fundada en que los argentinos éramos incapaces de manejar los resortes básicos de nuestra estructuración como Nación. ¿Cuáles son esos resortes básicos? Los que conocemos históricamente, los que decía Scalabrini: la energía, el transporte, las comunicaciones, y ahora podemos agregar la minería y el agua. Yo, personalmente, creo que no hay ninguna posibilidad de transformación real de la sociedad si ésta no vuelve a tomar, a través de la institución del Estado —por supuesto, no este Estado, sino un Estado organizado, inteligente—, el manejo de estas que yo llamo “variables instrumentales”.

El ferrocarril fue una herramienta estructurante del espacio nacional y, además, era de alguna manera promotor de industrias semipesadas y pesadas —no olvidemos la fabricación de rieles, de locomotoras, de electrónica, etc.—; había que atacar esa posibilidad, y ya se ve en los primeros pasos lo que Cavallo hace con Menem: sacar los trenes de pasajeros del área metropolitana y formar una empresa para los ferrocarriles metropolitanos; tirarles por la cabeza los trenes interurbanos a los gobernadores sin que existiera la posibilidad de que una provincia hiciera circular trenes de larga distancia por razones económicas y técnicas, por un montón de razones. La prueba es que no pasó nada. Y después, desestructurar el sistema de cargas. ¿Cómo hacerlo? En vez de hacer que la carga fuera un servicio público, como tenía la obligación Ferrocarriles Argentinos —la empresa estatal—, dividió en varias “unidades de negocios” —como les gustaba decir a estos tipos— y adjudicó líneas de carga a grupos económicos que utilizan el ferrocarril como un transporte interno de su proceso de producción y comercialización. Son los casos, por ejemplo, de Fortabat o Ca-



margo Correa. El ochenta y pico por ciento de la producción que lleva es producción propia o de empresas asociadas: piedra, arena, cemento, etc. El caso más patente y más patético es la entrega del ferrocarril Mitre —hablo de la parte de cargas— al grupo Urquía, y son tan colonizados que le pusieron por nombre Nuevo Central Argentino.

El caso típico de esa división en unidades de negocios es el de los ferrocarriles metropolitanos, unos mil kilómetros alrededor de la Capital Federal. Dividieron, y da la casualidad de que los grupos adjudicatarios de esas concesiones tienen una fuerte vinculación con el transporte automotor.

¿Qué quedó en pie de la antigua estructura ferroviaria?

Calculó que, de los 35 mil kilómetros de vías que se podían explotar antes de las concesiones, hoy se explotaran unos 8 mil kilómetros, 9 mil en el mejor de los casos, con la diferencia de que, en aquel momento, sobre 15 mil kilómetros vos podías circular a velocidades de entre 90 y 120/140 kilómetros por hora. Hoy, en ningún lado de esas vías interurbanas vas a más de 40-50 kilómetros por hora, ¡30! O sea, tenés la velocidad “preferrocarril”. Eso significa algo que en general se mantiene oculto: la descapitalización. Hay líneas que están abandonadas absolutamente; tienen tres o cuatro descarrilamientos diarios andando a 20 km/h. Se han destruido locomotoras, vagones —el patrimonio—, esa acumulación que hizo la sociedad durante tantos años se fue al carajo. Vos le das a un empresario activos por miles de millones de dólares: al tipo ¡qué le va a importar mantener esos activos o modernizarlos, si en el componente de costos ferroviarios, uno de los valores más altos es el de la amortización de los activos! Entonces, como esa amortización en realidad no figura, el tipo trabaja hasta exprimir todos

los activos; si se caen 10 vagones, los deja. Vos vas por la provincia de Entre Ríos, mismo Corrientes, y vas a ver vagones tirados al costado de la vía. Lo mismo en la vía para Mendoza. Esa destrucción de activos, las autoridades de los distintos gobiernos la conocen perfectamente, pero no actúan.

¿Qué opinás sobre el tema de la unión de los pueblos a través de ferrocarriles bioceánicos?

Mirá... hay un proyecto del Banco Mundial, el proyecto IRSA, que firmaron todos los países del UNASUR. Duhalde en representación de la Argentina, Lula, en fin. Ese proyecto, lo único que hace es establecer vinculaciones este-oeste en Sudamérica para bajar los costos de los productores multinacionales. Y nos deja colgados con los ejes norte-sur, que son los que a nosotros personalmente, por estar en el lugar que estamos, nos conviene.

Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué te parece que haya que hacer?

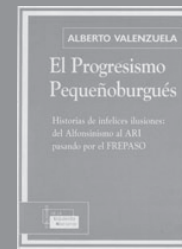
Yo vengo desde hace años... en uno de los congresos de la CTA en Mar del Plata, donde había 12 mil personas —en la comisión donde yo participaba había 2 mil— dije: “Che, no somos capaces de escribir diez, quince puntos en un pizarrón sobre los que estemos de acuerdo”. Esas diez o quince cosas tienen que estar vinculadas con esto que yo llamo las “variables instrumentales” del modelo de transformación, es decir, qué opinamos del transporte, qué opinamos del petróleo, del gas, de la minería; no qué opinamos: qué tenemos que hacer. Si nos ponemos de acuerdo con esos diez puntos, después podemos pelear por lo demás. Pero el compromiso debería ser: estos son los elementos que aglutinarán un frente, un movimiento. Me parece importante el esfuerzo que ha hecho la Constituyente Social, al menos genera el camino por donde se podría discutir algo de esto.

Entonces, lo que hay que construir es una fuerza nueva. Yo creo que la experiencia con Solanas en la Capital es clara: el tipo vino con un discurso, pone cuatro o cinco ejes en discusión y la gente dice “puta, éste parece que habla distinto”. No sabe lo que va a pasar, pero por lo menos cambia el discurso.

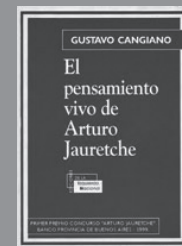
¿Cuál debería ser el punto de partida de una política de reconstrucción ferroviaria?

La primera medida es mandar a hacer un inventario detallado, compararlo con los bienes que se entregaron y sacar la cuenta de lo que pasó. La segunda es seguir la ruta de los subsidios; esto quiere decir: “a dónde fue”, “en qué gastaste”; porque por ahí te vas a encontrar con que se usaron subsidios para hacer barrios cerrados, para triangular, lavar guita y repartirse “beneficios” en los directorios. Está denunciado, no por mí, por Sergio Taselli, en su momento. Esas dos medidas creo que son las que pueden indicar un cambio de orientación en la política nacional; que el Estado asuma y diga: “Hermano, yo te entregué tanto, quiero ir a verlo”. Porque los inventarios los hacen por declaración jurada los mismos concesionarios. ¡Pasó con el San Martín! ¡Pasó con el Roca! Nosotros sabemos que falta cualquier cantidad de material y acá no pasa nada

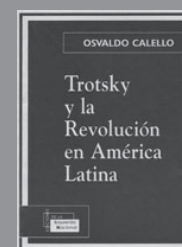
NUESTROS LIBROS



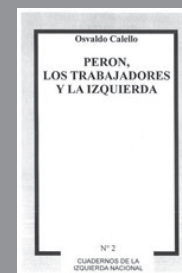
El Progresismo Pequeñoburgués Historia de infelices ilusiones: del alfonsinismo al ARI pasando por el Frepaso
Alberto Valenzuela



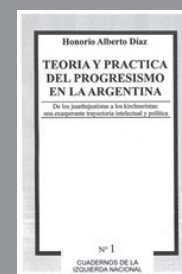
El pensamiento vivo de Arturo Jauretche
Obra ganadora del primer premio en el concurso “Arturo Jauretche”, organizado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires
Gustavo Cangiano



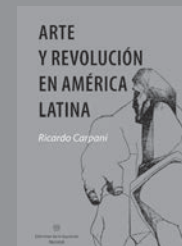
Trotsky y la revolución en América Latina La vigencia de las tesis de León Trotsky escritas en México hace siete décadas.
Osvaldo Caelelo



Perón, los trabajadores y la izquierda
Osvaldo Caelelo



Teoría y práctica del progresismo en la Argentina De los juanbejotistas a los kirchneristas: una exasperante trayectoria intelectual y política
Honorio Alberto Díaz



Arte y revolución en América Latina
Ricardo Carpani

versión pdf en www.izquierdanacional.org

Para mayor información, escribinos a: contacto@izquierdanacional.org o visitá nuestra web: www.izquierdanacional.org